

## Victimarios de El Amparo forman parte de la Alianza Gubernamental **ESTADO CONTINUA EN MORA CON CASO DE EL AMPARO**

Al cumplirse este 29 de octubre 14 años de la masacre de El Amparo y a 7 de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó al Estado de Venezuela continuar las investigaciones, sancionar a los responsables e indemnizar a las víctimas, el Estado venezolano sigue sin cumplir con dichas obligaciones.

Como se recordará, 14 pescadores fueron masacrados por efectivos del Comando Específico “José Antonio Páez” (Cejap) el 29 de octubre de 1988, en el sector conocido como Caño La Colorada, Río Arauca del Edo. Apure. El Cejap estaba integrado por funcionarios de la Policía Técnica Judicial (PTJ), la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) y miembros de las Fuerzas Armadas.

Las investigaciones de los hechos fueron dirigidas arbitrariamente por los tribunales militares y los indiciados juzgados de manera inconstitucional en la jurisdicción militar. Agotados los esfuerzos para obtener justicia y en virtud de las innumerables irregularidades que ocurrían en el proceso judicial, las organizaciones de derechos humanos Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), con el apoyo de los abogados Gertulio Romero y Fabián Chacón, elevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión elevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 15 de enero de 1994, luego que los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Ramón J. Velázquez incumplieran sus recomendaciones. Un año después, el 11 de enero de 1995, el Estado reconoció los hechos y asumió la responsabilidad ante la Corte Interamericana. El 14 de septiembre de 1996 dicho tribunal dictó sentencia fijando el monto de las indemnizaciones que debían pagarse a los dos sobrevivientes y a los familiares de los fallecidos y ordenó que se continuara con las investigaciones y se sancionara a los responsables.

Aunque durante el gobierno del Presidente Caldera se canceló casi la totalidad de las indemnizaciones, éstas se pagaron incompletas al no acatarse el mandato de la Corte en cuanto a la forma de calcular los montos en moneda nacional. Los imputados en los hechos, por su parte, fueron dejados en libertad a través de una sentencia inconstitucional emanada de la Corte Marcial y lamentablemente confirmada por la Sala Penal de la extinta Corte Suprema de Justicia. Años después, luego de un largo y amañado proceso judicial en la jurisdicción militar, los funcionarios sobre los cuales había pruebas suficientes que determinaban su responsabilidad, quedaron en libertad.

El actual gobierno no sólo incumple también las obligaciones para con las víctimas y los sobrevivientes, sino que permite que personas que fueron procesadas por éstos hechos y otros vinculados, sobre las cuales se acumularon suficientes pruebas de culpabilidad, ocuparon u ocupan altos cargos gubernamentales. Entre ellos, pueden señalarse a José Ramón Rodríguez Chacín, ex ministro de Relaciones Interiores que hoy ocupa un alto cargo en la

dirección del Movimiento Quinta República (MVR); Omar Antonio Pérez Hudson, en aquel entonces Sargento Técnico de Primera (Ej.), y actualmente Director Nacional de Investigaciones de la Disip; y Enrique José Vivas Quintero, Coronel para esa época y hoy diputado al Parlamento Andino, por el MVR.

En opinión de Provea es lamentable que un gobierno que reiteradamente usa la masacre de El Amparo como ejemplo para demostrar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, se sirva de funcionarios y dirigentes políticos, sobre los que pesan responsabilidades en el ajusticiamiento de 14 pescadores. Esa conducta, constituye un acto contradictorio en el discurso gubernamental. También representa un incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana, la cual ordenó sancionar a los culpables.

Provea, una vez más, exhorta al gobierno del Presidente Hugo Chávez a terminar de cancelar las indemnizaciones a los familiares de las víctimas y a los dos sobrevivientes y que establezca responsabilidades en los hechos. La impunidad contraviene el sistema democrático y su tolerancia vulnera los derechos humanos.

Darwin Suárez  
Encargado de Medios de Provea

Ccs., 28.10.02.